



NUE 227-A-2019 (AG)

Rodríguez Tobar contra Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con cincuenta y un minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.

1. Descripción del caso:

Fredy Armando Rodríguez Tobar, en adelante el apelante, recurrió en apelación ante este Instituto de la resolución de referencia RSI-MTPS-0166-2019, emitida el 17 de septiembre de 2019 por la oficial de información de la **Ministerio de Trabajo y Previsión Social** (en adelante **MTPS**), que denegó información consistente en:

“Certificación de la personería jurídica de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán”

En ese orden, la oficial de información de **MTPS** resolvió denegar lo solicitado por tratarse de información clasificada como confidencial de conformidad a los artículos 24 letra “c”, 25 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), según el jefe del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales de dicho Ministerio.

Por su parte, el recurrente manifestó su inconformidad con dicha resolución, señalando que es información de carácter público, pues la resolución que concede la personería jurídica se tiene que publicar en el Diario Oficial. Cuando se reconoce la existencia legal del sindicato se procede a incorporar a un registro público; de ahí es que, la finalidad del registro es la publicidad, según lo expuesto. Por lo que finalmente solicitó que se le extienda la certificación solicitada, o en su defecto se le entregue una versión pública de dicho documento.

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado Andrés Gregori Rodríguez para instruir el procedimiento y proponer el proyecto de resolución.



El informe justificativo al que se refiere el Art. 88 de la LAIP, fue suscrito por Elsy Beatriz Aldana Juárez y Haydee Margarita Bolaños Beltrán, en su calidad de apoderadas generales judiciales del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, adjuntando la documentación de acreditación correspondiente. En dicho informe manifiestan en lo medular: i) que por medio de memorándum de referencia DGT-DNOS-HR-009-INT-2019 de fecha 18 de noviembre de 2019, el licenciado Hamilat Misael Reyes, en su calidad de Jefe del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales, manifestó que desde el 11 de septiembre de ese mismo año, la información solicitada se encuentra en resguardo dentro de los Registros de Inscripción de Asociaciones Profesionales de Trabajadores que para tal efecto lleva ese Departamento, pero que la misma ha sido clasificada como confidencial, por lo cual requería del consentimiento expreso de sus titulares para su divulgación, esto con base a los artículos 24 y 25, con relación al Art. 28 de la LAIP, por lo que estaba prohibido divulgar dicha información; asimismo, que la LAIP en su Art. 6 letra “b” establece que la afiliación sindical es considerada como un dato personal sensible, y que sobre la base de esa valoración, existe una declaratoria de confidencialidad de fecha 11 de julio del año dos mil trece, en la cual la entonces Jefa del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales clasificó los nombres de las personas que integraban las Juntas Directivas Sindicales como información confidencial; y ii) que en tal sentido, ratifican la resolución impugnada, mediante la cual se resolvió denegar la información solicitada por estar clasificada como confidencial. Finalmente solicitaron: a) se les tenga por parte en el presente procedimiento, y b) se tenga por agregada la siguiente documentación en copias certificadas por notario: Poder General Judicial y Administrativo con Cláusula Especial otorgado a su favor por Oscar Rolando Castro en su calidad de Ministro de Trabajo y Previsión Social; y, del memorándum de referencia DGT-DNOS-HR-009-INT-2019 de fecha 18 de noviembre de 2019.

La audiencia oral se llevó a cabo de manera virtual en la fecha y hora señalada, por medio de la plataforma “Meet” de Google, sin la comparecencia del apelante licenciado **Fredy Armando Rodríguez Tobar**; y la comparecencia de la apoderada especial del ente obligado, licenciadas **Elsy Beatriz Aldana Juárez**, quien manifestó no contar con incidentes que plantear para la no realización de la audiencia ni elementos probatorios que ofrecer para ser incorporados al expediente.

Por su parte, la representación del **MTPS** ratificó los argumentos expuestos en el informe de ley, agregando que no se entregó debido a que al tratarse de información de carácter confidencial, no se contaba con el consentimiento expreso de los miembros de la Junta Directiva de dicho sindicato para entregar la misma; y finalmente, ratificaron también la resolución emitida por la oficial de información objeto de impugnación en este procedimiento.

2. Análisis del caso:

Para el análisis que nos concierne, este Instituto ha determinado su pronunciamiento respecto a: *si la 'certificación de la personería jurídica de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán', es información confidencial o pública.* En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** breves consideraciones sobre los límites al derecho de acceso a la información pública (DAIP); **(II)** análisis del caso en concreto entorno a la naturaleza de la información solicitada.

I. La LAIP establece los límites a la entrega de información en poder de los entes obligados, los cuales incluyen la información reservada y confidencial. Por esta última se entiende aquella que consiste en “información privada en poder del Estado, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido”, como bien podrían ser el derecho a la intimidad personal, al honor o a la autodeterminación informativa (Art. 6 letras a, b y f de la LAIP).

El derecho a la autodeterminación informativa tiene por objeto preservar la información de las personas tanto físicas como jurídicas que se encuentra contenida en registros públicos o privados frente a su utilización arbitraria, sin que necesariamente se deba tratar de datos íntimos. Desde esa perspectiva, el ámbito de protección del aludido derecho no puede entenderse limitado exclusivamente a determinado tipo de datos —es decir, los sensibles o íntimos— pues, lo decisivo para fijar el objeto que con este se busca conservar es la utilidad y el tipo de procesamiento que de la información personal se haga.

De acuerdo con el Art. 58 letra “b” de la LAIP, este Instituto tiene el mandato de garantizar tanto el debido ejercicio del DAIP como la protección de la



información personal, por lo que cada caso concreto debe analizarse prolijamente a efecto de establecer las medidas que concilien y ponderen ambos derechos.

Dado que la controversia se centra en determinar si la información solicitada es confidencial o no, este Instituto deberá pronunciarse previamente si el caso en análisis se ubica en el supuesto regulado en el Art. 24 letra “c” de la LAIP y luego, si procede la elaboración de una versión pública de la información, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

II. En ese sentido, la afiliación sindical, como manifestación de la libertad sindical, indica que una persona trabajadora —del sector público o privado— o empleadora, es o fue miembro de un sindicato, federación, confederación o de una organización internacional de trabajadores o empleadores. Esta información, de acuerdo al Art. 6 letra “b” de la LAIP, es un dato personal sensible, de manera que solo corresponde a sus titulares conocer sobre dichos datos; y, solo ellos, sus representantes legales y apoderados pueden acceder a los mismos.

El **MTPS** posee ese tipo de información en el ejercicio de sus facultades legales, por lo que debe utilizarla exclusivamente para el cumplimiento de sus fines institucionales y adoptar medidas que protejan la seguridad de esos datos; así como respetar la prohibición de difundirlos, distribuirlos o comercializarlos, salvo que haya mediado el consentimiento expreso y libre de los titulares o que se trate de aquellos casos en que no se requiera tal consentimiento, de conformidad con los Arts. 32, 33 y 34 de la LAIP.

En el caso que nos ocupa, el apelante solicita tener acceso a una “certificación de la personería jurídica de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán”. Al respecto, diremos que así tal cual ha sido redactado el requerimiento por el apelante, genera cierta incerteza sobre el tipo de información o documento al que pretende acceder el peticionario, dado que la personería jurídica sería en todo caso la de la Asociación Sindical de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, no así la de la Junta Directiva (JD), pues esta última, independientemente del sindicato que se trate, no tiene personería jurídica, es decir, que esa JD no constituye en sí misma una persona jurídica,

ya que esta se forma e inscribe a raíz de la existencia legal del sindicato, es decir, cuando ya se le ha dado tal reconocimiento.

Por otro lado, de acuerdo a los argumentos expuestos por el MTPS durante la tramitación del presente procedimiento, específicamente en el informe rendido junto con la documentación anexa al mismo, dicho ente obligado ha mantenido su postura respecto a que los nombres de los miembros de las Juntas Directivas de los sindicatos es información confidencial, sujeta al consentimiento previo de estos para su divulgación.

No obstante lo anterior, en su recurso de apelación, el apelante señaló que la información solicitada es la que se manda a publicar en el Diario Oficial. Al respecto, señala el Art. 219 inciso octavo del Código de Trabajo, se advierte que la información que se debe publicar de manera gratuita en el Diario Oficial, de conformidad al inciso séptimo, es: la resolución que conceda la personalidad jurídica del sindicato que se trate, o en su caso la constancia de silencio administrativo, y sus Estatutos.

Por lo que, del análisis anterior, se concluye que el ciudadano **Rodríguez Tobar** no está solicitando datos sobre la Junta Directiva, sino más bien una *"certificación de la resolución que concede la personería jurídica de la Asociación Sindical de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán"*, obedeciendo así a lo descrito en el Art. 219 del Código de Trabajo.

Entonces, a juicio de este Instituto, con la entrega íntegra de dicha resolución, no se estaría vulnerando datos personales sensibles, pues como bien lo dispone el Art. 219 inciso séptimo, es una resolución que la misma Ley especial en materia sindical dispone que sea publicitada o divulgada, disposición que no contraría lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública como ley rectora de la protección de datos personales en el sector público.

En consecuencia, a criterio de este Instituto, la resolución solicitada es información pública, al ser un acto administrativo favorable emanado del MTPS en beneficio de ciertas personas. En ese sentido, no cabe hablar de generar una versión pública de la misma a la luz del Art. 30 de la LAIP en tanto, como ya se mencionó, su publicidad viene dada expresamente por la Ley especial en la materia. Por tanto, procede que este Instituto revoque la resolución



impugnada y ordene al MTPS que emita una certificación la resolución que concede la personería jurídica de la Asociación Sindical de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, de conformidad con el Art. 30 de la LAIP.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 90, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP; 80 del RELAIP, y 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **RESUELVE:**

a) **Revocar** la resolución RSI-MTPS-0166-2019, emitida el 17 de septiembre de 2019 por la oficial de información del **Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)**, que denegó el acceso a la: *“certificación de la resolución que concede la personería jurídica de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán”*, por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) **Ordenar** al **Ministerio de Trabajo y Previsión Social** que por medio de su titular, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, gire instrucciones a la oficial de información para que entregue a **Fredy Armando Rodríguez Tobar**, la *“certificación de la resolución que concede la personería jurídica de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán”*, por ser información pública.

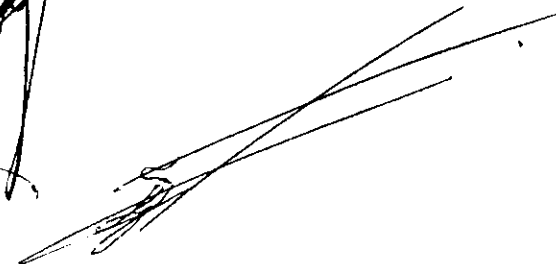
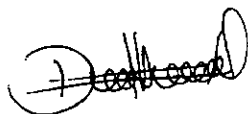
c) **Ordenar** al **Ministerio de Trabajo y Previsión Social**, que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, y una copia del índice de información reservada actualizado, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.


Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JH/CC/RP

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los quince días del mes de enero de dos mil veintiuno.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



